



EN LA FRONTERA. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 1995. FOTO: ALEX WEBB

La Jornada **19 Aniversario**
Ojerasca
Suplemento mensual. Número 138. Octubre 2008

Saqueados, reprimidos, exiliados... y rebeldes

Los arriesgados migrantes del norte de Veracruz
La policía comunitaria de Guerrero cumple 13 años
El Pentágono y el Procede

BOLIVIA: la oligarquía se quiere robar la Constitución

escriben Rosa Rojas y Raúl Zibechi

Se desintegra la Amazonia: Marlon Santi / Sur Central: experiencia campesina
en el vientre de Los Ángeles / Trabajo esclavo en Brasil
El Petén, una bomba de tiempo / El ejército colombiano arremete contra los pueblos
(Arco Iris Mil): poema binacional de Juan Felipe Herrera / El indio más famoso de Hollywood

Saqueados, reprimidos, expulsados... y rebeldes

Como no sucedía hace décadas, la represión contra las protestas populares es hoy política de Estado en todo el territorio nacional. Aunque se ocultan en lo posible los eventos represivos, o se tergiversa la versión de los hechos en cada caso, el mensaje gubernamental es claro: al que se mueva le va a caer todo el peso de la Ley (la suya, se entiende).

Y con puntualidad, cumple. Si así de bien lo hiciera con otras promesas. Ya son demasiados casos para considerarlos "aislados". Sólo en este octubre, ataques policíacos en Chinkultic, Xoxocotla (y todo Morelos); el Ejército en Atenco y Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, la policía en el Zócalo del Distrito Federal. Los episodios se suman a los ya incontables "castigos ejemplares" y criminales desde 2006 contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los pobladores de Viejo Velasco Suárez, San Juan Lachivía, Dorados de Villa y muchos más. Nada puede trivializar el número de heridos, violados, torturados, encarcelados injustamente o muertos por causa política.

Al que se meta con la policía le toca: es una política de poder, que no de justicia. La impunidad está garantizada. Acontece así precisamente ahora que el desgobierno se extiende por el país y la corrupción delincinencial de elementos policíacos, mandos y hasta corporaciones enteras, al servicio del narco, los secuestradores, los traficantes de armamento y personas, es pan de cada día.

Estas policías impresentables, con frecuencia indignas de la confianza ciudadana, cuentan con órdenes superiores, no mera "licencia", para castigar, incluso asesinar a quienes protestan en carreteras, zonas arqueológicas, parques nacionales, desde sus propias calles, radios comunitarias, predios como los de Nueva Castilla (Nuevo León) o Lomas de Poleo (Chihuahua). Resulta que "la ley" son esos tiras que se vengan del pueblo a nombre de sus amos.

Como acaba de reiterar la ejecución de seis personas de Miguel Hidalgo en

Chinkultic, Chiapas, los agentes homicidas serán exonerados, no digamos ya sus mandos y las autoridades civiles que ordenan operativos donde la tortura y el asesinato de civiles desarmados es sistemática. Ni siquiera importa que no exista orden judicial, como en Chinkultic. Basta con que se quejen los terratenientes, el INAH o la Profeco.

Lo notable es que aún así los pueblos sigan protestando, se insubordinen con razones que el poder desatiende o prostituye (pues para eso sí tiene dinero). Se movilizan indígenas, maestros, colonos, jóvenes, viudas de mineros y campesinos, madres de hijas e hijos devorados por la violencia criminal que el Estado no controla (y con frecuencia induce y patrocina como durante tres años han ilustrado fehacientemente el priísta Ulises Ruiz en Oaxaca, su par Enrique Peña Nieto en el Estado de México y sus émulo panistas y perredistas).

En un contexto nacional e internacional muy alarmante, la economía está dada al desastre y las contrarreformas constitucionales dirigidas a fastidiar el interés nacional van viento en popa. Cuánto entusiasmo por naufragar.

La gente lleva más de una década organizándose, haciendo claro que no se van a dejar. Defenderá sus tierras, sus culturas, sus escuelas, sus calles, sus sitios históricos, sus recursos naturales, su dignidad colectiva. Aunque les echen policías robotizadas, el Ejército federal, paramilitares y hasta sicarios institucionales como en Oaxaca (los otros sicarios funcionan bajo una lógica distinta, la del narco).

Los medios nacionales lo disimulan, pero hay alarma mundial por la represión política en México, la increíble falta de respeto a los derechos humanos. Y no es sólo "asunto de ONG", sino de gobiernos, parlamentos, la Organización Mundial Contra la Tortura, tribunales internacionales y hasta UNICEF. En un contexto donde la represión cuenta con la complicidad explícita de la prensa electrónica y escrita.

Mientras que al venerable y bien legitimado 68 sólo le falta aparecer en telenovelas, el 2008 no ha concluido, reventado hace rato la nota roja y sigue la matando. Así, la represión política es hoy, a lo más, información policiaca. Sin fallar, la "razón" la tienen los mandos y los jefes civiles de las fuerzas del orden.

El descontento popular no pinta para disminuir. Las golosinas de los políticos no convencen, y menos ahora que "renace" el PRI montado en la mercadotecnia y un gasto "social" lucidor pero lo más barato que se pueda. Los damnificados de la economía, los ríos y huracanes no tienen ya por qué creer; el cinismo de los funcionarios es la respuesta. De modo similar, los pueblos y las organizaciones sociales que resisten al sistema político que no deja de traicionarlos. ¿Cómo extrañarse entonces de que cunda lo que los zapatistas de Chiapas ahora llaman "la digna rabia"?

La esquizofrenia es del Estado. La resistencia, de los pueblos; para ellos el despojo, la humillación, el sufrimiento y la traición del poder han llegado demasiado lejos.

En esta hora inquietante *Ojarasca* cumple 19 años. Si este suplemento sigue dando lata es gracias al generoso espacio de *La Jornada* para autores de toda América. Para los pueblos y organizaciones que hablan y actúan desde su tierra, que es el lugar de los hechos. Para sus literaturas vivas, la migración, la creación de sabias formas de gobierno comunitario y regional, la tenacidad para contar su historia y ser visibles, determinantes en el destino de nuestras naciones americanas.

umbrell

Las fotos de los músicos fueron tomadas en Tultepec, estado de México por Jerónimo Palomares, colaborador de la revista *Biodiversidad, sustento y culturas*.

SIERRA NORTE DE VERACRUZ

“Se arriesgan juntando la desesperación a la esperanza”

Alfredo Zepeda

Martín Reyes decidió salir para el otro lado, al nan guadí. Lo tenía pensado desde el año pasado, cuando los vientos del huracán Dean barrieron su milpa. El maíz se le acabó por marzo, al igual que a la mayoría en comunidad de La Mirra en Texcatepec, Veracruz. La gente piensa que ése no es el mejor mes para intentar el paso de la frontera. El mejor cálculo es en julio, no se sabe bien por qué. “La migra como que afloja. Tal vez para que los tomates, las papas y las uvas no se queden sin cosechar en California y en el sur de New Jersey.” Martín llamó a Gumaro, su coyote de Phoenix. “Vente con los de Ayotuxtla, es un grupo de diez. Antes de que se venga el calor.” “Tuve mala suerte”, dice. “Los otros escaparon y a mí me atraparon después de ocho horas de camino desde Nogales Arizona”. Le tomaron las huellas de todos los dedos: “Tienes una orden de arresto en Nueva York de hace siete años. Te quedas preso en Tucson. Si al mes no viene por ti la policía, te vas de regreso, pero estás fichado”. Volvió a intentar a los dos días. Lo pescaron otra vez, a un kilómetro de alcanzar la camioneta del coyote. “Quedas deportado por 20 años. Si vuelves a entrar, sigue la cárcel ya como delito.” Cuatro días encerrado. Otros tres de descanso y cruce de nuevo. “La tercera es la vencida” —lo animó Gumaro. Pero no. Otra vez el grupo escuchó las sirenas y el ladrido de los perros, a la mitad de desierto. “Esta vez ya no me ficharon, nada más me aventaron a Sonora. Cansado, ya me regresé hasta México de aventón. Para después de Todosantos intento otra vez. En la cárcel aprendes que algunos tienen deportación de por vida, pero no les pueden cumplir el castigo porque la gente ya no cabe en las cárceles. En la de Tucson tenían que sacar gente diario, para que pudieran entrar los que traían.”

En la Sierra y la Huasteca la resistencia está requiriendo de toda la imaginación de los pueblos. El episodio de Martín es una muestra de cómo la gente está buscando por todos lados, en la comunidad aferrada a la milpa, al potrero y a la *faina* común. En el otro lado, con tarjeta de identidad inventada, en las plantas de pollos de Raeford, Carolina del Norte.

Las elecciones municipales del año pasado dejaron una estela de desilusión,

entre los tenek, otomíes, náhuatl y tepehuas. Fueron unos comicios comprados descaradamente con dineros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) y con desviación indiscriminada de fondos de todos los programas de gobierno a la mano. Con mimbres de organizaciones fantasma como la Unión de Comuneros y Ejidatarios del Norte, al estilo de la vieja Antorcha Campesina, los dineros circularon para la entrega de bombas fumigadoras, estufas Lorena inservibles, rollos de alambre de púas, despensitas repartidas a media noche, a cambio de votos para el PRI. Funcionarios de camisa roja sangre, puestas de moda desde el 2006 por Roberto Madrazo, repartieron las migajas y las promesas para asegurar sin dejar hueco una serie de victorias amañadas. El resultado fue una efímera apotheosis adelantada de “Fidel Fidelidad” en su tercer año de gobierno.

clama que “Veracruz Late con Fuerza”. De por sí, las autoridades ya filtraron que no necesitan acercarse a ver lo que sucede abajo: el logo: Veracruz, Gobierno Electrónico, es una confesión de parte grabada en los posters de la Secretaría de Hacienda.

Nosotros somos los que no nos vamos a morir, porque sabemos cultivar todo lo que comemos. Si el azúcar se sube a trece pesos, hasta podemos resucitar nuestros trapiches

Los de la comunidad tepehua de El Mirador, en Tlachichilco pelean desde hace veinte años el fin de los trámites de restitución de sus bienes comunales, pero el gobierno presume como



COLONIA MATAMOROS, TIJUANA. FOTO: ALEX WEBB

Como dice Raúl Páramo, la política se ha convertido en comercio de la falsificación de los procedimientos democráticos. La vida real de las comunidades contrasta con el triunfalismo fatuo de la propaganda que difunde el radio oficial de Veracruz, la radio gubernamental más grande del país. Mientras el precio del ganado en pie bajó a nueve pesos el kilo, el gobernador Fidel recibe el premio nacional al mérito ganadero. Un cementerio de proyectos de crías de pollos, cerdos y borregos pueblan las orillas de las comunidades, mientras la propaganda oficial omnipresente pro-

greso irrefrenable la entrega de ocho mil hectáreas en la Huasteca a una empresa extranjera para la producción de agrocambustibles. El abandono de los campesinos indígenas de naranjales sin cosechar en los campos, por el desplome de los precios, contradice la proclama de un Veracruz administrador de la abundancia.

Pero en los repliegues de la Sierra, más allá de las brechas inacabadas y de la mirada de los funcionarios, las comunidades comprueban que la fuerza propia, sorda, organizada al modo de la vida que siempre ha sido, es la que disipa los

espejismos y las promesas falsas. La carestía de los alimentos que recorre el mundo, más bien incitó a los nahuas y otomíes a lo largo de la ruta del río Vinazco a ampliar las siembras del maíz y del frijol, del cacahuete y de las habas, para asegurar que los tapancos se repletan de cosechas. “Nosotros somos los que no nos vamos a morir, porque sabemos cultivar todo lo que comemos. Si el azúcar se sube a trece pesos, hasta podemos resucitar nuestros trapiches.” La señal de alerta ante la amenaza de los transgénicos está encendida y los tepehuas de Tlachichilco refuerzan la confianza en las semillas propias, siguiendo el consejo de la Radio Huaya. La lluvia vespertinas alternadas con un sol en cielos despejados se aliaron este año al trabajo terco de los tenek de Xilitla para llenar las mazorcas con el maíz que ya se asegura para la ofrenda de Todosantos.

La organización que se fundó hace veintidós años continúa viva. Y mantiene sus mismos nombres que recuerdan las luchas del comienzo: Comité de Defensa Campesina y Unión Campesina Zapatista. Para que cada quien valiera igual que todos y para que no sólo contaran las pistolas de los caciques. “Pensaron los priístas que nos acababan con la compra de elecciones, pero aquí estamos juntándonos cada semana y pensando todo el tiempo, porque pueden perderse muchas cosas, menos la dignidad”.

Buscar también por otro lado es inevitable. Los de Ayotuxtla salieron entre siembra y escarda hasta el corte de las tunas de julio a agosto en las nopales de Santiaguillo Tolman, junto a Teotihuacan, para completar su gasto. Otros, como Martín, juntando la desesperación a la esperanza se fueron a arriesgar, tomándole la medida a la migra en los pasos del desierto de Altar. Se preocupan en Tzicatlán por los jóvenes que ya se tardan en el Bronx y en Connecticut, entre el temor de no poder cruzar de nuevo y el laberinto de trámites del pasaporte que ahora exigen los gringos para tomar el avión de salida en el aeropuerto de La Guardia.

Resistir es también saber esperar como se espera a que jiloteen las milpas y maduren en elotes. La resistencia siempre es activa, y navega en el mar agitado de las agresiones.

Las fotos de nuestro número de aniversario provienen de *Crossing, photographs from the US México Border* de Alex Webb, The Monacelli Press, 2003; *Terra* de Sabatião Salgado, Alafrauga, 1997.

La Jornada
Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca en La Jornada
Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez y Eugenio

Bermejillo • Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán • Caligrafía: Carolina de la Peña • Retoque fotográfico: Alejandro Pavón • Asesoría técnica: Francisco del Toro

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. San-

ta Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, cp. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de títu-

lo: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

TRUCE AÑOS

La policía comunitaria de Guerrero no deja de crecer

La policía comunitaria de Guerrero llega a su treceavo aniversario más fuerte y más grande que nunca, aunque sin recursos y con más de 40 órdenes de aprehensión en su contra. Nació en los pueblos de estas regiones mixtecas, tlapanecas y nahuas, en respuesta a los actos vandálicos que se incrementaban de manera alarmante sin que las autoridades hicieran nada por detenerlos, pues en muchos casos ellas mismas eran cómplices o protagonistas de los delitos.

Su proyecto de autonomía, como el de las comunidades zapatistas de Chiapas, no sigue manual alguno. Se construye en el día a día y en la reflexión colectiva que responde a los desafíos que van enfrentando. No son indígenas que arrestan malhechores para ponerlos a disposición de la justicia, como en un principio. Hoy son una de las experiencias autonómicas más notables de México, organizada desde y para los pueblos.

En 1995 eran apenas unas decenas de hombres organizados al margen del Estado que vigilaban los caminos, carreteras, veredas e incluso las mismas comunidades que eran objeto de innumerables robos, asaltos, violaciones sexuales y asesinatos. Poco a poco fueron creciendo en legitimidad entre los pueblos y, paradójicamente, también en carencias. Su negativa a incorporarse a los cuerpos policíacos del estado y, con esto, perder independencia los ha tenido en la mira de los gobiernos en turno quienes, además de hostigarlos, les niegan el reconocimiento de su autonomía.

Juan Villanueva, miembro del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), comenta en entrevista que “el gobierno no acaba de conformarse con nuestra existencia. Siempre está en contra de nosotros, sea del partido que sea. No nos reconocen en nuestro trabajo y sólo están buscando la manera de perjudicarnos”. Más de 40 órdenes de aprehensión en su contra confirman esta declaración.

“Nosotros no queremos ser parte del gobierno, pero que sí nos reconozcan en nuestra autonomía, que nos dejen hacer nuestro trabajo sin perseguirnos. No tenemos sueldo y aún así nos andan molestando”, señala Villanueva en la víspera de los festejos del treceavo aniversario.

A partir de que se hicieron cargo de su propia seguridad, evidenciando la corrupción e ineficacia de los cuerpos policíacos y del sistema judicial, la delincuencia se redujo más de un 90 por ciento en esta región cafetalera de extrema pobreza, violaciones a los derechos humanos, militarización, migración y narcotráfico; pero también lugar de nacimiento de legendarios movimientos sociales. San Luis Acatlán, municipio sede de la CRAC, vio nacer y morir al maestro rural y guerrillero Genaro Vázquez.

“De los poquitos que empezamos pues fuimos creciendo” —relata Juan Villanueva— “y ahora ya somos 700 comunitarios”. La policía comunitaria empezó con presencia en sólo dos municipios y 13 años después abarca a 72 comunidades de 10 municipios. A principios de este año estaban en 56 comunidades, de acuerdo al testimonio de Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, pero a partir de la creación de sedes como la de Xitlaltepec, municipio de Metlatónoc, siete comunidades indígenas presentaron su solicitud de ingreso y lo mismo sucedió en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec.

Rebasados todos los órganos de impartición de justicia del estado y los municipios, tres años después de su conformación la policía comunitaria creó, a instancias de los pueblos, la CRAC, al darse cuenta de que durante tres años (de 1995 a 1998) se la habían pasado entregando delincuentes al Ministerio Público y luego, casi de inmediato, los veían nuevamente en las calles cometiendo cualquier clase de atropello. Los altos niveles de corrupción y complicidad de las autoridades con la delincuencia les impedían lograr sus objetivos; y además, aún en los casos en los que se encarcelaba a los delincuentes, esto tampoco resolvía el problema.

Con el nacimiento de la CRAC, ya no se proponen sólo atrapar malhechores, sino legitimar el derecho tradicional (que contempla la reeducación y el trabajo comunitario a los infractores de la ley) y perseguir y sancionar delitos del fuero común (robo, asalto, violación, asesinato, abigeato, entre otros). En otras palabras, fortalecen la autonomía en los hechos.

No hay recursos y les hace falta de todo, desde alimentos hasta uniformes, lámparas, calzado y, por supuesto, armas y parque. Se han propuesto la autosuficiencia con proyectos productivos que no han logrado cuajar. No tienen sueldos ni apoyos y sobreviven con la comida proporcionada por los pequeños comerciantes que les proporcionan jitomates, cebollas, calabaza y demás verduras para cocinar. No dejarse cooptar ha tenido sus costos, por lo que requieren hacer autogestionario el proyecto, punto importante a tratar en las reflexiones de su aniversario número trece.

“Nos apoyamos entre nosotros, pero aquí todos somos campesinos pobres y el tiempo que le dedicamos a la policía es por el pueblo”, señala Villanueva. Pero con todo y carencias, dice, “seguimos deteniendo la delincuencia y hemos crecido nosotros”.

Gloria Muñoz Ramírez



FIESTA DE SANTA CECILIA, TULTEPEC, EDO. DE MÉXICO. FOTO: JERÓNIMO PALOMARES

Trece años de justicia

Tilapa, Guerrero. En un ambiente festivo y al mismo tiempo solemne, se celebró en esta comunidad del municipio de Malinaltepec el 13 aniversario de la Policía Comunitaria con la presencia de cientos de policías de las varias regiones, comisarios y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), activistas, medios alternativos y organizaciones solidarias.

En la reunión se abordó la militarización, la comunicación, la educación y los proyectos productivos, y se insistió que el movimiento va más allá de la policía comunitaria. Es un proyecto integral con el que las comunidades buscan solución a sus problemas. En el ámbito de la comunicación, por ejemplo, se discutió cómo seguir desarrollando el naciente proyecto de la radio comunitaria. Y en educación, sigue creciendo la Universidad de los Pueblos del Sur, inaugurada el 12 de octubre de 2007.

Los participantes de la mesa sobre la situación nacional de seguridad y justicia hicieron un balance de la coyuntura actual: creciente inseguridad, militarización del país, sistemas policial y de con una severa crisis de legitimidad, una política del miedo vehiculada por los medios de comunicación y la intolerancia hacia los movimientos sociales. Ante este panorama, resulta paradójica la criminalización de la Policía Comunitaria, que en los 13 años desde su fundación ha logrado lo que el propio Estado no ha podido hacer en ninguna parte: traer seguridad a una región antes assolada por la delincuencia. Esta paradoja se explica por dos visiones desencontradas: la legalidad sin legitimidad de la “justicia” oficial, y la legitimidad de la policía comunitaria sin el reconocimiento legal por parte del Estado.

Les faltan recursos materiales, tienen dificultades de comunicación y, sobre todo, está el acoso del gobierno, que no reconoce la autoridad de la CRAC para impartir la justicia. “El asunto de la seguridad es un gran negocio para el Estado”, afirma Cirino Plácido.

Al anochecer la bruma cubre a la comunidad de Tilapa. La banda afina sus instrumentos, bailan jóvenes, niños y ancianos y el padre Mario canta, pues de baile y canto también se hace la rebeldía.

(ARA)



FIESTA DE SANTA CECILIA, TULTEPEC, EDO. DE MÉXICO. FOTO: JERÓNIMO PALOMARES

Los geógrafos, el ejército estadounidense y el Procede

Si no fuera porque la ineficacia sistemática de los complejos de inteligencia mundiales es consustancial a las agencias de control gubernamentales, seríamos todos, sin importar raza, credo o afinidad política, social, cultural, sexual, musical, culinaria, catalogados de ajenos, extraños, extranjeros, no aptos, sospechosos, peligrosos, diferentes u otro cualquier término que signifique que no somos considerados iguales o “pares”, como dicen en los institutos de investigación científica, tan propensos a la exclusión y a formar y defender sectas. La propensión al control por parte de los gobiernos en complicidad con las empresas se extiende a más y más aspectos de la vida.

Según una nota de Sophia Maines, “Exploring the World Anew”, publicada en el *Lawrence Journal World and News*, en octubre de 2006, donde entrevista al profesor de la Universidad de Kansas Jerome Dobson, el profesor dice: “el enfoque de inteligencia clasificada que ha estado en boga desde 1947, ha fracasado. Hemos llegado a un gobierno que valora la información secreta, la información satelital y el conocimiento físico acerca de los sitios, pero es muy pobre en términos de cultura, política, relaciones humanas y relaciones con la tierra. Lo viejo ha fallado”. Dobson, dice Maines, “profesor de geografía y presidente de la American Geographical Society, la principal sociedad geográfica estadounidense, considera que Estados Unidos necesita otro modo de entender el mundo y por 125 millones de dólares, puede hacerlo”.

Entonces, el profesor propone las expediciones Bowman, que llevarán a geógrafos y otros académicos a rincones ignotos del planeta a revisar y monitorear todos los aspectos posibles que “informen al gobierno y al público de lo que es el mundo”.

Muy importante para el profesor es que la gente se dé cuenta de lo crucial de la geografía, una disciplina muy menospreciada y marginada.

El prototipo de investigación que propone Dobson ya está en curso en México, donde Dobson y Peter Herlihy, otro colega suyo de la Universidad, ya investigan los cambios en la tenencia de la tierra en áreas rurales de México. Esto, claro, cuenta con el financiamiento económico del Departamento de Defensa estadounidense a través de la Oficina de Estudios Militares Foráneos en Fort Leavenworth e involucra a investigadores en México, Kansas y Canadá.

Dice Sophia Maines: “los equipos están rastreando la transferencia de la propiedad, de las tierras comunales o ejidales a propiedad privada, un proceso legalizado por un cambio en la Constitución desde 1992. Herlihy considera que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Patios Urbanos conocido como Procede, ha ocasionado una revolución silenciosa”. Y textualmente dice Herlihy: “Diría que es el cambio en la

tenencia de la tierra más significativo en cualquier país de América Latina desde la época colonial”.

Según el informe de Maines, los investigadores han estado viajando de la Huasteca a Oaxaca, le han enseñado cartografía a los residentes y utilizan su conocimiento “para desarrollar mapas del área. Están juntando información acerca de los tipos de tenencia de la tierra, aspectos demográficos y de quién vende y quién compra una parcela de tierra”.

Hasta ahora han compartido lo que juntan con los residentes, pero “Herlihy avizora otros usos de la información”. Y enfatiza que la información recabada en México puede servirle a los importadores (en especial a una organización “no lucrativa” SmartPort Inc. que pugna por convertir Kansas City en un puerto interno permitiendo que ingresen bienes extranjeros y pasen aduana ahí) para brindarles información de las áreas aledañas a las viejas rutas de ferrocarril en México y “otras muchas cosas que nos harán entender mejor el terreno cultural. No podemos predecir todos los usos de dicha información”. El propio Herlihy no deja de anotar algo muy sabido en México: “Mucha de la tierra ejidal era bosque, por lo que el destino de la tierra tiene implicaciones para la conservación ambiental. Los cambios pueden también afectar la migración”.

Lo extraño del caso es que en toda América Latina, en particular en México, viene funcionando una especie de geografía autogestionaria desde mucho antes que las expediciones Bowman, que no sólo “comparte la información con los residentes”, sino que compartirla, construirla y armar mapas de entendimiento regional en colectivo, es el punto central de este modo de entender la geografía. Como siempre, pero en este caso es algo muy claro, la diferencia fundamental es que mientras que los proyectos de geografía autogestionaria son trabajados por la gente, para la gente y proponen expresamente modos de entender y defenderse de los ataques y megaproyectos decididos sin su consentimiento que afectarán a toda la región, al país y más, las Expediciones Bowman (nombradas así en honor a otro exdirector de la American Geographical Society) están destinadas primordialmente a que el gobierno estadounidense y sus militares adquieran información de primera mano. Así lo pone Geoff Demarest, analista de la oficina de las Américas de la Oficina de Estudios Militares Foráneos de Fort Leavenworth: “En un mundo como el de hoy, debemos admitir que podría mejorar la base de conocimientos sobre la que ha estado tomando decisiones el gobierno”, tanto que además de la investigación en México ya planean una para las Antillas. Puesto así, la pregunta final es ¿qué busca el ejército estadounidense hurgando a la privatización de la tierra en México?, algo en lo que el artículo de Maines, evade profundizar.

(RVH)

(ARCO IRIS MIL)

Juan Felipe Herrera

arco iris mil
colores whirling come
shining come pouring
a celebrar la tierra tierra nueva to churn to make
una canción to grow to young soil
in our woven hands violetas yellow green lluvia
arco iris
luminosa trenza flores in the sky
cabeza redonda
de hijos sonrientes
sembrando la nación vida fresca

yes
in our heart es la luz
we bring del sol ancient father on our head
one thousand petalos rising flower de maíz
dulce
trenza luminosa come

weaving
darkness cuerpos sin lucha luz to vida
a sprouting heart
a sostener
a refrescar cada día a
nutrir
amor luminoso flaming arco
iris

Juan Felipe Herrera, autor chicano ya conocido por los lectores de *Ojarasca*, publicó una amplia recolección de sus escritos como *187 razones por las que los mexicanos no pueden cruzar la frontera. Documentos 1971-2007 (187 Reasons Mexicanos Can't Cross the Border. Documents 1971-2007, City Lights, San Francisco, 2008)*. Este poema bilingüe se publicó originalmente en *Rebozos of Love*, 1974.

La oligarquía también quiere robar al pueblo su nueva Constitución

Rosa Rojas. La Paz, 12 de octubre. Una nueva etapa de la lucha por refundar Bolivia mediante la aprobación de una nueva Constitución que incluya a las mayorías indígenas históricamente excluidas se inicia esta semana: la de lograr que el Congreso nacional, cuya cámara alta está dominada por la derecha, apruebe la ley de convocatoria a los referendos constitucionales y dirimitorio para que finalmente sea la ciudadanía boliviana la que con su voto decida si acepta o rechaza el Proyecto de Nueva Constitución (PNC) aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007.

Con la movilización de unas 5 mil personas que arranca este lunes desde el poblado de Caracollo hasta la sede de gobierno —que estima recorrer los cerca de 200 kilómetros que las separan en una semana y llegar el lunes 20 a esta ciudad— se inicia la presión de los movimientos sociales aliados del gobierno del presidente boliviano Evo Morales para lograr que el Congreso, y específicamente el Senado controlado por la derechista alianza Poder Democrático y Social (Podemos) deje de bloquear la citada convocatoria.

Paralelamente al avance de esa marcha, que parlamentarios de Podemos han pedido que se cancele para que el Congreso “no trabaje bajo presión”, se llevarán a cabo las negociaciones entre el gobierno, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las tres fuerzas opositoras representadas en el parlamento, para destruir el que se ha denominado “cerco interno”, que impide la culminación del proceso constitucional con la aprobación o rechazo, mediante el voto ciudadano, del mencionado proyecto de Constitución.

Esas negociaciones, en las que la oposición pretenden revisar todo el texto del PNC, estarán siendo atestiguadas por representantes de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas, a pedido de la oposición, que teme que mediante un “cerco” al Congreso, las organizaciones sociales los obliguen a aprobar esa convocatoria.

Es claro, sobre todo después del referéndum del 10 de agosto, cuando el gobierno de Evo Morales fue ratificado con 67.4 por ciento de los votos, que la oposición ha tomado de rehén el PNC porque si se somete a votación casi seguramente será aprobado, pese a una campaña mediática en su contra que ha alineado a la mayoría de los medios electrónicos y escritos.

Para llegar a esta etapa, hubo de superarse antes, también con una masiva movilización que convocó a unas 20 mil personas en lo que se denominó “el cerco a Santa Cruz”, el golpe cívico-prefectural que entre agosto y septiembre llevó a la toma violenta y saqueo de una cincuentena de oficinas de instituciones estatales en los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que integran la denominada “media luna”.

Esas acciones fueron perpetradas por grupos paramilitares prohijados por los comités cívicos de esos departamentos, homólogos del “brazo armado” del Comité Cívico cruceño, la Unión Juvenil Cruceñista, en una escalada de violencia que culminó el 11 de septiembre con la masacre de El Porvenir, en Pando, donde por lo menos 16 personas murieron a manos de un grupo de sicarios formado por el prefecto pandino, Leopoldo Fernández.

Luego del estado de sitio departamental y de la aprehensión y confinamiento de Fernández y 15 personas más involucradas en la masacre, los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, y Beni, con el acompañamiento de la prefecta de Chuquisaca, se sentaron a negociar en Cochabamba con el gobierno, negociación que terminó el 5 de octubre sin que los prefectos aceptaran firmar los acuerdos a los que se había llegado en lo referente a modificaciones al capítulo de

Autonomías del PNC conforme a las observaciones que ellos habían planteado.

Los prefectos regresaron a sus departamentos y el cruceño Costas, a quien por sentarse a negociar con el gobierno los radicales de su región lo acusaron de “traidor”, llamó a una “resistencia civil” para evitar “la imposición del proyecto de Constitución del MAS”, que dicen, es “dictatorial”, y atenta contra la democracia y sus “valores y forma de vida”.



ARRESTOS, TIJUANA, 1995. FOTO: ALEX WEBB

En la negociación con los prefectos se re-redactó el capítulo de autonomías, informó el constituyente Raúl Prada, quien estuvo en la mesa técnica respectiva. Se acordó que habrá cuatro niveles de gobierno autónomo: departamental, regional, indígena y municipal sin subordinación de ninguna especie entre sí.

Se acordaron, informó, 50 competencias a las autonomías departamentales pero no se cedió en lo que respecta al tema de la tierra ni en lo relativo a los recursos naturales, que Santa Cruz quería como de competencia exclusiva departamental y que quedaron como de competencia privativa del Estado.

En el caso de las autonomías indígenas el texto del proyecto constitucional no se modificó, indicó Prada, “es decir tienen gestión exclusiva, potestad exclusiva en los recursos renovables pero no en los recursos no renovables; de todas maneras los recursos estratégicos son propiedad del pueblo boliviano y cualquier destino y explotación que se haga de ellos tiene que hacerse a través de consultas” con los pueblos indígenas.

En lo electoral se mantiene la elección de autoridades indígenas por procedimientos y normas propias.

El tema de la justicia comunitaria quedó como una competencia de administración exclusiva de las autonomías indígenas por un lado, y en términos nacionales es competencia exclusiva del Estado.

Se le preguntó si esa competencia exclusiva de la justicia comunitaria no choca con la igualdad de las personas ante la ley y contestó: “no porque en el texto constitucional se plantea que la autonomía indígena respeta el derecho a la vida y los derechos

fundamentales y fundamentalísimos, esos son los límites y los alcances de la autonomía indígena” en materia de justicia.

—¿Si yo, mestiza, cometo una falta en una zona indígena qué justicia se me aplica, la comunitaria o la justicia ordinaria?

—Si se hace en territorio indígena y afecta bienes comunitarios se aplica la justicia comunitaria, si no se afectan los bienes comunitarios, como persona ajena a la comunidad tienes acceso a la justicia ordinaria.

Se le cuestionó qué justicia se aplicaría en el caso de un asesinato dentro de una comunidad.

Contestó que ese es uno de los temas complicados que se han dejado a la ley secundaria o al Tribunal Constitucional porque “tienen que dirimirse en términos interculturales entre dos justicias, se han pensado tribunales que resuelvan conflictos entre dos justicias y además en el caso de asesinato puede más bien pasar a la justicia ordinaria y no la comunitaria”.

Y añadió, “lo que hemos planteado en el texto constitucional es básicamente la dualidad de justicias, lo que no hemos resuelto en el texto constitucional es la interculturalidad entre las dos justicias”.

Los de abajo siguen de pie

Raúl Zibechi

Con la ofensiva de septiembre, la oligarquía racista de Oriente se trazó dos objetivos: revertir el aplastante triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio de agosto, en el que alcanzó el 67 por ciento de los votos, e impedir la realización del referendo constitucional previsto para diciembre, en particular bloquear la consulta sobre la cantidad de hectáreas que pueden poseerse en Bolivia. La oligarquía terrateniente y agroexportadora basa su poder en el robo de millones de hectáreas a los pueblos originarios y, hasta que Morales llegó al Palacio Quemado, en el control del aparato estatal. La autonomía que ahora reclama es la forma de salvaguardar y proteger esas riquezas.

A partir del 5 de septiembre, los jóvenes fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista, junto a miembros de Falange Socialista Boliviana, barras bravas futboleras y pandilleros contratados por las prefecturas, organizados en grupos de choque, asaltaron sedes de instituciones estatales, saquearon locales de movimientos indígenas y ONG en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, o sea en la llamada Media Luna que concentra las riquezas hidrocarburíferas del país.

La masacre de El Porvenir, en el departamento de Pando, fue el momento más dramático y sangriento de la escalada racista. Ante la presión de sus bases, la Federación Única de Campesinos de Pando convocó un ampliado en la ciudad de Cobija al que acudían miles de campesinos, en dos caravanas. A ese departamento limítrofe con Brasil, nunca llegó el reparto agrario prometido por la revolución de 1952 y, en febrero de 2008, el gobierno de Morales declaró terminado el saneamiento de tierras en Pando “sobre la base de un cuerpo de normativas que desfavorecen a los que menos tienen”, lo que generó malestar entre las comunidades y organizaciones (ver “El gobierno en la canasta de las responsabilidades”, Luis A. Gómez, septiembre de 2008, www.ubnoticias.com)

El prefecto Leopoldo Fernández, dueño de 50 mil

hectáreas y destacado miembro de la “oligarquía terrateniente, maderera, narcotraficante y racista”, según la organización campesina, armó mercenarios que emboscaron y ametrallaron una columna de 1 500 campesinos que acudían a Cobija a decidir cómo enfrentar la escalada fascista, los persiguieron monte adentro y los remataron heridos e indefensos. Al menos 30 campesinos fueron asesinados de esa forma el 11 de septiembre y durante las cacerías posteriores.

La faceta más esperanzadora de la crisis boliviana es que los de abajo están diciendo que prefieren morir en la guerra que arrodillarse ante los opresores

La tibia y tardía respuesta del gobierno y la bronca acumulada en dos años y medio, en los cuales el MAS espolea la movilización social para negociar en mejores condiciones con la oligarquía y sus prefectos, forzaron a las organizaciones sociales a tomar la iniciativa. El Plan 3000, un enorme asentamiento de 200 mil personas y 87 barrios en Santa Cruz, poblado por migrantes aymaras y quechuas, resistió con valor las embestidas de los grupos de choque. Sus pobladores no acataron los paros impuestos y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los matones que pretendieron destruir los mercados populares. Como sucedió en El Alto en octubre de 2003, las mujeres pusieron en fuga a los racistas, mostrando que un barrio entero se ha convertido en nuevo bastión indígena urbano.

En Sucre, donde en mayo pasado jóvenes universitarios desnudaron y obligaron a arrodillarse a decenas



EL BARRENDO, CHIHUAHUA, 1979. FOTO: ALEX WEBB

de campesinos que acudían a un acto del MAS, a fines de agosto la humillación se convirtió en cerco multitudinario a la orgullosa capital departamental. El cerco encabezado por la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca, exigía el reconocimiento por las autoridades de los subprefectos electos en cabildos, y le indicó a las élites blancas y mestizas que se terminó la impunidad.

En septiembre, luego de la masacre de El Porvenir, 20 mil campesinos e indígenas cercaron la ciudad de Santa Cruz para “condenar la masacre y el genocidio de nuestros hermanos campesinos e indígenas de Pando” y defender la unidad del país (ver comunicado de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Cidob —Confederación de Pueblos Indígenas— y Federación de Campesinos de Santa Cruz, 19 de septiembre). Sólo levantaron el cerco para facilitar el diálogo entre gobierno y oposición, pero advirtieron que si fracasa, “radicalizaremos nuestra medida”.

La movilización social, masiva y contundente, como la que caracterizó el ciclo de protesta 2000-2005, volvió a ser un factor decisivo en la nueva coyuntura que atraviesa Bolivia. Como apunta Raquel Gutiérrez (“Vientos de guerra civil en Bolivia, Programa de las Américas, 23 de septiembre), en la actitud de los movimientos “se nota un nuevo margen de autonomía política recuperada ante las decisiones gubernamentales”, toda vez que han comprendido que el gobierno será incapaz de detener a la oligarquía, “pero no están, al menos tendencialmente dispuestos a subordinarse a que ese gobierno les garantice lo que anhelan”.

Una buena muestra de esa autonomía y del carácter del actual protagonismo de los de abajo, es el comunicado emitido el 17 de septiembre por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. El texto está dirigido al “compañero presidente” pero está lejos de prodigarle un apoyo incondicional. Ante la iniciación del diálogo con la oposición, la organización campesina establece, en cuatro puntos que resumimos, cómo se relacionan con “su” gobierno:

No aceptamos que se toque el texto constitucional aprobado en Oruro. No nos parece hermano Presidente que se deba entrar a entablar acuerdos políticos respecto a la autonomía sin mostrar a las organizaciones sociales cuáles son los alcances de éstos que podrían tener efectos negativos sobre la autonomía indígena-origenaria-campesina. Queremos reclamarle la poca consideración y apoyo por parte del gobierno a las organizaciones de tierras bajas que fueron objeto de despojo de sus instalaciones y sedes. No puede hermano Presidente concluir este diálogo cambiando disposiciones del nuevo texto constitucional relativas al capítulo sobre autonomías indígena-origenaria-campesinas, a nombre de la pacificación del país, lesionando nuestras demandas conquistadas con sangre de valerosos compañeros.

Si alguien podía pensar que el conjunto del movimiento social había sido cooptado por el gobierno de Evo Morales, declaraciones como la anterior, que abundan estos días en Bolivia, enseñan una inequívoca autonomía. Más aún, le marcan la cancha al Estado, le ponen límites al gobierno. Ésta es, ciertamente, la faceta más esperanzadora que muestra la crisis boliviana. En buen romance, los de abajo están diciendo que prefieren morir en la guerra que arrodillarse ante los opresores. Más: que la prudencia y la consideración hacia el “hermano Presidente”, tienen un límite. Que su destino lo decidirán ellos mismos.

Los cabildos indígenas del Cauca gritan ¡ya basta, carajo!

15 de octubre. Después de años de guerra sucia, asesinatos, encarcelamientos, desplazamiento y la invasión devastadora de sus territorios ancestrales, las organizaciones, comunidades y cabildos indígenas del Valle de Cauca, decidieron bloquear la Vía Panamericana, para decirle al gobierno de Álvaro Uribe y al del gobernador del Cauca, Guillermo González Mosquera que no permitirán más tratados de libre comercio “que nos roban el territorio y la vida sin consultarnos ni respetar nuestros derechos”. Que se acaben la política de guerra, el Plan Colombia II y el proyecto Seguridad Democrática. Que vayan a la cárcel los parapolíticos “y que los pueblos juzguemos a los criminales de Estado, quienes se han servido del poder para someternos y acabar con nuestras culturas ancestrales”. Que se deroguen de inmediato todas las leyes de despojo empezando por el Estatuto Rural (Ley 1152), el Código Minero y el Plan de Aguas.

La represión llegó rauda pese a que en el comunicado de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) los pueblos en resistencia expresaban:

“Estamos dispuestos a dialogar con la verdad si del otro lado no hay mentiras y trampas. Estamos dispuestos a creerle a los hechos y no a las palabras. Más que a Usted Gobernador, le exigimos al orden que Usted representa que respete el Mandato de los pueblos”. Desde el 14 por la noche, el general Páez Varón llegó con tropas, tanques y helicópteros y anunció que lo iba a matar y al cierre de esta edición ya había dos muertos, más de 35 personas heridas, 18 de ellas con arma de fuego, a causa del “brutal ataque de la fuerza pública a los indígenas civiles en La María Piendamó, ataque que se inició a las 6 de la mañana”.

Los medios de comunicación excusan la masacre acusando falsamente a los indígenas de estar controlados e infiltrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los cabildos del Cauca, agraviados, insisten: “Esto es falso, pero justifica la masacre que se está cometiendo en este momento. Las legítimas demandas se ignoran. El ejercicio de derechos y libertades se niega, el territorio se entrega a transnacionales, la guerra

sucia asesina comuneros y líderes, los medios engañan y promueven el terror y la manipulación, las leyes despojan, el Plan Colombia convierte territorios en teatros de operaciones, el gobierno respaldado por Estados Unidos cierra el espacio para el conflicto político civilista y promueve la guerra para luego señalar como terroristas a quienes protestan. El gobierno promueve a la insurgencia, la fábrica, la instiga. El resultado de esto es que el movimiento indígena y popular, cansado, arrinconado, digno, se moviliza en una acción de hecho para dar a conocer su agenda y exigir que sea respetada. La respuesta es señalarnos como terroristas, atacarnos como se atacaría a un ejército y mientras lo hacen, presentar un discurso democrático y civilista como si no hubieran obligado a los pueblos a la desesperación. ¿Qué quiere el gobernador, el gobierno? ¿Que volvamos silenciosamente a ser víctimas de la guerra sucia, a dejarnos despojar y asesinar sin protestar, a dejarnos meter en una guerra que es contra nosotros?” La moneda está en el aire.

Ojarasca

Experiencia campesina en el vientre de Los Ángeles

Alejandro Reyes Arias

En un área industrial de la región Sur Central de Los Ángeles, California, hay un gran terreno baldío que ocupa toda una cuadra. Son casi seis hectáreas cercadas con reja y alambre de púas, un espacio vacío que podría pasar desapercibido en esa cenicienta extensión de concreto y asfalto. Pero hace dos años, antes de que el gobierno del alcalde demócrata Antonio Villaraigosa lo destruyera, ese terreno estaba lleno de vida. Aquí, en este amarillento vacío terregoso, floreció durante 14 años lo que era probablemente la granja urbana más importante de los Estados Unidos, cultivada por 350 familias pobres, en su mayoría inmigrantes latinoamericanos, que reconstruían sus tradiciones y su vínculo con la tierra, en un espacio de convivencia lejos de la violencia, la discriminación y los muchos otros problemas que afectan a las comunidades pobres en ese país.

Una compleja y truculenta trama de intereses económicos y políticos hizo que la ciudad le vendiera el terreno al empresario Ralph Horowitz, y en mayo de 2006 los campesinos recibieron el aviso de que serían desalojados. Se formó entonces un amplio movimiento de resistencia compuesto por los campesinos de la granja, miembros de la comunidad, activistas, integrantes de la Otra Campaña, ecologistas y varias celebridades. A pesar de la resistencia, el 13 de junio de ese año tropas de choque desalojaron a los campesinos y detuvieron a 40 personas, y tres semanas después regresaron a destruir la granja por completo.

Hoy, dos años después del desalojo, un grupo de familias de la extinta granja aún lucha por reconstruir y preservar una alternativa campesina ante la marginación que viven los “de abajo” en Estados Unidos. Todos los viernes los campesinos viajan tres horas a un terreno

en Bakersfield y otro en el Valle Imperial, donde cultivan productos orgánicos que venden en un tianguis los domingos a un lado de la antigua granja, donde también realizan eventos educativos y culturales.

Al mismo tiempo, continúan luchando por recuperar el espacio original de la granja. Este año, la ciudad aprobó la propuesta de Horowitz para construir una bodega de la empresa Forever 21 en el predio, saltándose el requisito de presentar un informe de impacto ambiental. La amplia movilización convocada por los campesinos logró bloquear la aprobación. Al mismo tiempo, los campesinos unieron esfuerzos con el Centro de Trabajadores de Costura para denunciar las violaciones laborales de la empresa Forever 21 —la cual, desde la destrucción de la granja, ha donado 1.3 millones de dólares al gobierno de Villaraigosa—, cuyos contratistas emplean mano de obra migrante en condiciones de explotación.

Horowitz insiste que el proyecto traerá empleos al Sur Central. Los campesinos entienden la ironía de sustituir una alternativa autogestiva y liberadora por una que explota la mano de obra de las mismas comunidades desplazadas que crearon la Granja Sur Central.

Para captar la relevancia de la granja, es necesario entender el contexto en el que ésta surgió. El Sur Central es una región con una larga historia de exclusión, segregación racial y violencia. En 1992 fue el escenario de una de las más violentas rebeliones de la historia estadounidense, cuando la absolución de cuatro policías que golpearon brutalmente al taxista negro Rodney King desencadenó la frustración acumulada ante el racismo y la exclusión, provocando una revuelta que duró seis días y resultó en 53 muertes y 12 mil arrestos.

Las condiciones en el Sur Central no distan mucho de la realidad de buena parte de los barrios pobres y “de color” de cualquier urbe estadounidense: altos niveles de desempleo, bajos salarios, sobrepoblación, escasez de vivienda, segregación racial, altos índices de enfermedad, fuerte presencia de pandillas, drogadicción, un sistema educativo desastroso. En cuestiones de salud, la situación es alarmante. El Hospital Martin Luther King Jr, construido en los setenta como respuesta a la escasez de hospitales en el Sur Central, se destacó por ser el quinto de la nación en mortalidad infantil. En 2007 cerró sus puertas tras el escándalo provocado por la muerte de Edith Rodríguez, quien falleció después de 45 minutos de agonía en el suelo de la sala de emergencias mientras las enfermeras se rehusaban a atenderla y un encargado de la limpieza trapeaba su vómito ensangrentado.

La desigualdad, la pobreza, los problemas de salud y la pésima educación tienen un componente claramente racial. Es justamente en el periodo en

que estos problemas se agudizan (en los 80s), que la población “blanca” pasa a ser minoría en Los Ángeles. De 1970 a 1990 esa población disminuyó de 70.9 a sólo 40.8 por ciento, mientras la población latina creció de 14.9 a 36.4 por ciento. Hoy los latinos conforman la mitad de la población de Los Ángeles.

Un factor que contribuye a los altos índices de problemas de salud entre los pobres en Estados Unidos es la alimentación. En estos barrios hay muy pocos supermercados u otras tiendas con productos frescos, y el precio de los productos saludables es exorbitante. Al mismo tiempo, hay una relación estrecha entre obesidad y desnutrición. Según las cifras oficiales, en 2004, el 36.8 por ciento de las familias pobres sufrían inseguridad alimenticia, y el 13.6 sufrían de hambre.

Pero en muchas partes de Estados Unidos, estos campesinos son protagonistas de resistencia y de la creación de alternativas como la Granja Sur Central que, a contrapelo del sistema, ofrecen la posibilidad de una vida más digna. La

granja constituía no sólo una alternativa de autosustentabilidad alimenticia e independencia económica, sino una fuente inédita de alimentación de alta calidad a bajos precios, para una de las poblaciones más desfavorecidas de los Estados Unidos. Además, los campesinos de la granja preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era, y quiere seguir siéndolo, un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo de los barrios pobres: un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales y donde se fortalecía un sentimiento de identidad y de valor comunitario. Era, también, un espacio educativo, donde las nuevas generaciones aprendían a convivir con los más viejos, y donde las tradiciones, los idiomas y las expresiones culturales se transmitían y preservaban. La tradición democrática indígena y campesina de las asambleas comunitarias se veía reflejada en las reuniones semanales de la Asamblea General, durante la cual se tomaban las decisiones colectivas.

Para Libero Tlatoá, como para otros miembros de la granja, el sueño del “oasis en un desierto de concreto” —el título del documental de Sheila Laffey sobre la granja— sigue vivo, pues “cuando están destruyendo tu casa uno saca las garras.”

Alejandro Reyes, reportero alternativo de Radio Zapatista de San Francisco, California

Bomba de tiempo en el Petén

Tampoco los mexicanos solemos voltear al Sur. Si lo hiciéramos con más frecuencia y atención, veríamos, entre otras cosas, que en la frontera México-Guatemala del Petén se ha activado una bomba de tiempo: bases fuertemente equipadas del narcotráfico, entrega de riquezas a las transnacionales del turismo, inestabilidad social y destrucción del macizo selvático más importante de América después del Amazonas.

Según el matutino guatemalteco *Prensa Libre* las autoridades guatemaltecas afirman que “por Petén se da el principal trasiego de la droga vía aérea desde Cali y Medellín, Colombia, y desde Perú y Ecuador, aprovechando las condiciones geográficas de ese departamento”. El mismo periódico calcula en por lo menos 30 el número de pistas clandestinas en la región, en las que se han hallado abandonadas 45 aeronaves. Mark Wilkins, jefe del grupo militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, informó que en sólo una de estas pistas hay 31 aviones y avionetas quemados.

Más allá del equipamiento del narco petenero, Guatemala se ha convertido en otro escenario de las pugnas entre los cárteles mexicanos de la droga. El primer cártel mexicano que penetró en Guatemala fue el de Sinaloa, dirigido por el Chapo Guzmán, y que tuvo como aliado a Otto Herrera, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, es ahora el cártel del Golfo, a través de *los Zetas*, el que protagoniza estas pugnas. Como el enfrentamiento entre narcotraficantes ocurrido el pasado 25 de marzo en un balneario del este de Guatemala, en donde murieron 11 personas y la captura de varios miembros de esta banda entre los que destaca Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, considerado como el segundo al mando en el grupo de sicarios, cuya extradición a México parece inminente.

El pasado 23 de abril el periódico *Siglo XXI* dio a conocer que el grupo de *Los Zetas* está reclutando a ex militares guatemaltecos en el Petén por medio de anuncios transmitidos por una radio pirata (que no comunitaria). El periódico difundió que se buscaba sobre todo a “los que hayan recibido entrenamiento y técnica de kaibil”. Ya antes Carmen Aída Ibarra de la Fundación Myrna Mack, había declarado: “Los kaibiles siempre fueron una fuerza de élite que se encargaba de ejecutar masacres de acuerdo con los informes históricos, pero no había sino hasta ahora una clara confirmación de que estaban siendo cooptados por el narcotráfico”.



TRABAJADOR MIGRANTE. OESTE DE TEXAS, 1975. FOTO: ALEX WEBB

Fue precisamente en el Petén en donde la fuerza de los paramilitares se ha hecho patente. Durante el conflicto de 2002 entre el gobierno y los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), los paramilitares bloquearon las carreteras y aeropuertos de esta zona.

Auténtica “tierra de nadie”, el Petén ha visto bloqueados incluso los intentos por privatizar la inmensa riqueza biológica y de aprovechar el potencial ecoturísticos. La carretera que debió abrir brecha a los inversionistas interesados en los destinos turísticos naturales y arqueológicos ha sido suspendida del lado guatemalteco a pesar de que fue inaugurada con bombo y platillo por los presidentes Vicente Fox y Oscar Berger.

Los escasos intentos por que las comunidades aprovechen la riqueza del Petén han quedado coartados por la conflictividad que acarrea el narcotráfico. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado con la organización Trópico Verde, que intentó articular un trabajo con las comunidades de la extensísima Reserva de la Biosfera Maya. Sus coordinadores Carlos Albacete y Pilar Espinoza tuvieron que salir del país por los constantes atentados a ellos y a su organización por las denuncias contra el narcotráfico, que apuntaban a la colaboración de altos funcionarios de la policía guatemalteca.

Eugenio Bermejillo



PLAYA BOCA CHICA, TEXAS, 1978. FOTO: ALEX WEBB

Minuto a minuto se desintegra

Desde los proyectos que se generaron en el norte de la Amazonia con el boom petrolero de los años sesenta, no ha cambiado absolutamente el horizonte horrorizante. Minuto a minuto se desintegra a la madre tierra con todo sus componentes: la biodiversidad, la sociedad y las nacionalidades que habitamos allí.

En este rincón del mundo cada segundo se derrama crudo. La remediación no existe debido a que la tecnología no existe, y hay un gigantesco caso que sirve para demostrar que las empresas hacen graves daños al ambiente y los seres humanos.

Y éste es el caso Texaco que ya lleva más de una década en que las nacionalidades reclamamos que se remedie la contaminación, pero parece un caso de nunca acabar. Los de Texaco niegan lo que han hecho, y no sólo eso, los pueblos, waoranis, tagaeris, taromenanis, se encuentran en una encrucijada. Los territorios de ellos están en grave amenaza, no hay políticas para que los gobernantes dirijan el timón, para que prevalezcan los derechos y que sigan existiendo. Las nacionalidades siona, secoya, cofán y muchas otras han tenido que soportar estas sucesivas invasiones y ahora tienen que sobrevivir en espacios y reservaciones de un modelo capitalista como el de Norteamérica que excluyó a todas las naciones originarias en los Estados Unidos.

Después de un recorrido de cinco días por la extensa área afectada he sido testigo de la destrucción de las nacionalidades y también de los hermanos colonos. Mi conclusión es que el modelo extractivista no garantiza la vida en armonía.

La situación de los hermanos tagaeri y taromenani, cada vez está más frágil. La están convirtiendo en una tierra sin vida. El territorio de los waoranis está siendo reducido más y más, por empresas petroleras y madereras. Es una noticia aberrante, y es antihumana: las empresas están literalmente promoviendo el genocidio colectivo.

La toma de decisiones que hacen los gobernantes de nuestro país no ayudan: decisiones como dar fechas topes hasta enero del 2009 —así lo ha señalado Galo Chiriboga, ministro de Minas quien dijo a la agencia Efe, que “si hasta enero del 2009 no recibe suficientes ofertas compensatorias para mantener el crudo del ITT, se podría explotarlo”.

En el marco de la 149ª conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que se realiza en Viena, las zonas que en el futuro entrarán en el gran negocio petrolero son los bloques 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, que antes tenían un nombre humano y hoy son parajes numerados.

A este paso, el futuro de la Amazonia ya lo tienen decidido. Aquí no entra ninguna garantía para la existencia de pueblos y nacionalidades, por lo cual la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresa su profunda preocupación e invita a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional, a redireccionar la política extractiva y cambiar estos procesos y, de esta forma, garantizar la vida de los últimos pueblos y nacionalidades que se encuentran amenazados y conservar la última frontera de la biodiversidad en la Amazonia para en el futuro no ser cómplices de la destrucción de la madre tierra y el genocidio de nuestros hermanos. “Cuando se acabe el petróleo y los árboles nuestra madre tierra responderá con la maldición”.

Ciudad del Coca
23 de septiembre 2008.

Marlon Santi
presidente de Conaie, Pushak
Kuraka (Sarayaku Runa)



MINA DE ORO SIERRA PELADA, PARÁ, BRASIL, 1986. FOTO: SEBASTIAO SALGADO

ECUADOR

Violencia petrolera

De acuerdo a un comunicado firmado por varias organizaciones indígenas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el 11 de octubre del 2008, miembros de la IV División Amazónica Batallón Napo ingresaron por el río Aguarico a territorios indígenas de la comunidad kichwa Playas de Cuyabeno, en tres gabarras con grandes equipos camineros, al mando del jefe de la División. Playas pertenece al llamado Bloque 15, en Sucumbios, operado por la empresa estatal Petroamazonas.

“Los dirigentes de la comunidad, que no estaban al tanto ni habían sido consultados como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales, constataron la ausencia de permisos y de documentación de justificación de la medida. Luego se constató que las gabarras contenían maquinaria y materiales para realizar la perforación de los pozos Pañacocha 01 y Pañacocha 2 que se encuentran en los territorios indígenas que son zona de amortiguamiento del bosque protector Pañacocha.”

La comunidad se negó a dejarlos permanecer, todo de forma

pacífica alegando la protección de sus derechos ancestrales, y con justicia señaló que no había “ni autorizaciones menos aún las debidas consultas”.

Las Fuerzas Armadas y miembros de la empresa petrolera Petroamazonas respondieron de manera violenta. Dispararon balas de goma a quemarropa resultando 4 personas heridas. La violencia generalizada afectó a niños y ancianos. En el operativo participaron más de 400 militares usando incluso helicópteros. Se lanzaron indiscriminadamente bombas lacrimógenas.

“La empresa estatal Petroamazonas pretende haber llegado a acuerdos con seis familias del sector”, continúa el comunicado, “y que éste sería el justificativo para su ingreso violento, lo que es una práctica generalizada censurada por organismos internacionales de derechos humanos. El presidente de la comunidad, Barcelino Noteno, indicó que la comunidad está constituida por 56 familias. De ellas, 50 exigen la realización de la debida consulta tal como está establecido en la normativa vinculada”.

“Si contara la mitad de las cosas que viví en esas haciendas, no me creerías”

Joana Moncau

Antonio vive en la periferia de Açailândia, estado de Maranhão, región noreste de Brasil. Mientras conversa, dos de sus nietas corren de un lado a otro, pasan entre sus piernas y en un instante ya están en la calle levantando polvo. Ellas son una pequeña parte de su gran familia. Todos los parientes viven en los alrededores, menos los que salieron en busca de trabajo, en su gran mayoría hombres. ¿Cuándo regresarán? Nadie sabe: meses, años, tal vez una vida. En estos casos, sin dar noticias, hacen que aumente el número de viudas de maridos vivos. En tiempos de sequía, el flujo de hombres que sale a cazar empleo y se topa con la esclavitud aumenta, como si eso fuera tan inevitable como el proceso de la naturaleza que disminuye las lluvias todos los años.

Antonio también salió muchas veces de su municipio y de su estado en busca de trabajo. De regreso con los suyos y ya de cabellos blancos, espera frente a la sala de uno de los núcleos del Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos (CDVDH) de Açailândia para atestiguar su propia historia. Por primera vez verá el documental *Correntes* (“Cadenas”), que registró, entre los testimonios de otros Antonios, el suyo: un trabajador más que huyó de la condición de trabajo esclavo al que había sido sometido.

En el video Antonio aparece como un luchador que para rescatar su dignidad y sus derechos, aún bajo amenaza de muerte, huye de una hacienda. “¡Puedo morir, pero me voy! No pienso quedarme aquí trabajando toda la vida esclavizado para no mandar nada a mi familia”, dice en el documental. Sin embargo, en vivo, al verse narrando su propia historia, no tiene ese mismo aire de dignidad recuperada. Tanto le molesta que antes de que la proyección termine se levanta rumbo a la puerta de salida. “Para mí ya basta. No lloro porque soy muy hombre, pero recordar eso me causa un dolor que no tiene cura. Si te contara la mitad de las cosas que viví en esas haciendas, no me creerías”. En el Brasil de hoy los casos de tortura, castigo físico y humillación como los que Antonio sufrió incontables ocasiones no son tan escasos como deberían.

El de Antonio no es un caso aislado. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) calcula que anualmente 23 mil trabajadores rurales caen en las redes de esclavitud de las áreas de la frontera agrícola de la Amazonia y de El Cerrado brasileños.

La vieja modernidad. La esclavitud contemporánea difiere de la esclavitud colonial, abolida en Brasil en 1888. En vez de cadenas, los trabajadores ahora son atrapados por mecanismos más sutiles, como una deuda ilegal, y otros no tan sutiles, como las recurrentes amenazas físicas y psicológicas durante su cautiverio.

“¡Atención! ¡Necesitamos 40 trabajadores para una hacienda ganadera en Pará! ¡Es empleo garantizado! ¡Quien esté interesado por favor entre en contacto con Zé, aquí en la estación!” Este anuncio fue transmitido por una radio en la periferia de Maranhão. No les será difícil contratar rápidamente a esos 40 trabajadores que, engañados por la propuesta del “coyote” Zé, perpetuarán las estadísticas del enganche: 31.3% de los trabajadores liberados provienen de ese estado. El reclutamiento no siempre sucede así, pero en todos los casos la propuesta llega a los oídos del trabajador como la única oportunidad de conseguir sustento para su familia. Su destino son principalmente las haciendas ganaderas (58%), cañeras (11%) y de carbón (3%), distantes de su lugar de origen. Muchas veces son embriagados por el “coyote” para que no reconozcan el trayecto y no puedan huir cuando se den cuenta de la real condición a la que serán sometidos: condiciones inhumanas de trabajo, frecuentemente vigilados por hombres armados. Al final del mes, en vez de recibir el salario, descubrirán que deben pagar el transporte, la comida vendida a altísimos precios en las cafeterías de las haciendas y el uso de las herramientas de trabajo. Ese mecanismo de esclavitud por medio de la deuda ilegal es eficiente, pues resulta impagable (aumenta cada mes). Hay algunos Antonios que se arriesgan y huyen a pie, viajando durante días hasta encontrar abrigo, con el riesgo de ser “cazados” en el camino.



MINA DE ORO SIERRA PELADA, PARÁ, BRASIL, 1986. FOTO: SEBASTIAO SALGADO

Gracias a los testimonios de estos trabajadores, el problema del trabajo esclavo salió a la luz pública. En 1995, el gobierno federal brasileño reconoció oficialmente la existencia del trabajo esclavo contemporáneo. Ese mismo año, se creó el Grupo Móvil de Fiscalización, coordinado por el Ministerio del Trabajo y del Empleo (MTE), que fiscaliza las haciendas, libera los trabajadores y coloca el nombre de los empleados que usan trabajo esclavo en una lista negra.

La ciudad de Antonio. Ni el caso de Antonio ni el de Açailândia son aislados. La ciudad, como muchas otras de Brasil, sufre efectos colaterales de uno de los grandes proyectos de “desarrollo nacional”. Por ella pasa el tren de la empresa Vale, gigante mundial en el área de minería, que conecta a Paraupebas (Pará) con la Terminal Marítima de Ponta da Madeira en São Luís (Maranhão).

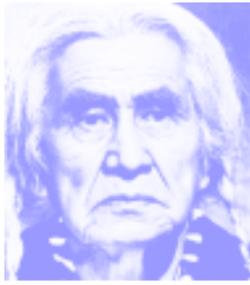
A lo largo de la vía férrea hay más de diez fábricas que componen el polo siderúrgico de Carajás. Cinco de ellas están en los barrios periféricos de Açailândia. Uno es el de Antonio. Estas industrias utilizan la línea del tren tanto para recibir de la Vale su principal materia prima (el hierro mineral), como para transportar el arrabio producido. La producción de arrabio requiere el uso de mucho carbón vegetal. Y el carbón vegetal exige la quema de mucha madera para ser producido. Una gran parte de la vegetación nativa de la Amazonia es quemada o

cede espacio a las plantaciones de eucalipto para abastecer las carboneras de las siderúrgicas. Además del daño ambiental, esas carboneras frecuentemente usan mano de obra barata, infringiendo leyes laborales o sometiendo a los trabajadores a una condición sólo comparable con la esclavitud.

Campos Lindos, en el estado de Tocantins, región centro oeste de Brasil, es otro municipio en el que se pretende aplicar este tipo de “progreso”. El discurso del desarrollo trajo a la región miles de hectáreas de plantaciones de soja que abastecen a grandes empresas del sector, como la Bunge y la Cargill. Donde antes era El Cerrado se extiende ahora un gran desierto de soja. Muchas familias fueron expulsadas de sus tierras por el miedo a las amenazas, o forzadas a abandonarlas a cambio de indemnizaciones irrisorias. Con la reducción de las tierras y de la producción agrícola familiar y con el fin de la vida comunitaria, muchos hombres se ven obligados a trabajar en esas haciendas de soja desarrollando los trabajos más pesados, como la extracción de raíces.

Antonio ahora resiste, incluso a su incredulidad de poder superar las marcas que el trabajo esclavo le imprimió. Su fuga y su adhesión a la cooperativa por la dignidad Codigna, donde produce carbón ecológico junto con otros trabajadores y trabajadoras víctimas del trabajo esclavo, lo comprueban.

Ojarasca



JEFE DAN GEORGE

El indio más famoso de Hollywood

Pequeño gran hombre, la memorable película de Arthur Penn (1970), con Dustin Hoffman en el papel de Jack Crabb, un joven indio trasplantado por la fuerza a la civilización del blanco, que hace de su retorno a sí mismo un viaje iniciático, significó en su momento un cambio en la visión que tenía el cine acerca de los indios en Norteamérica. Por primera vez no eran mascotas, enemigos perversos o "Tontos" como el patito del Llanero Solitario (que en México, piadosamente, se llamaba "Toro"). Se les veía al fin como protagonistas, gente de razón con estatura moral y sabiduría. Era novedad en la industria del entretenimiento, tan importante en la vida social de Estados Unidos.

Ya luego vinieron otras películas: *Geronimo*, *Danza con Lobos*, un *Último mohicano* reivindicativo, e incluso el cine indígena, como en *Señales de humo* (Sherman Alexie, 1998). Luego de ser invisibles y denigrados, hoy se sabe masivamente que esos pueblos llevan más de un siglo confinados en reservas, y que allí la vida suele ser cuando menos melancólica, si no desesperanzada. Donde sin embargo la lucha comienza una y otra vez.

En la película de Penn, un personaje clave es Viejo Cabaña de Piel, interpretado por el jefe salish Dan George. Por ese trabajo recibió premios de la crítica en Nueva York y fue nominado al Oscar de Hollywood, aunque ya parece que iban a dárselo a un indio.

Este es un diálogo entre el joven Jack Crabb, quien sobreviviría al genocida general Custer, y el Viejo Cabaña de Piel:

Jack: Conozco un hombre blanco tan valiente como cualquier Hombre Verdadero. Se llama general Custer.

Viejo Cabaña de Piel: Me gustaría conocerlo y fumar con él. ¿Qué significa su nombre?

Jack: Significa 'Pelo Largo'.

Viejo Cabaña de Piel: Buen nombre. ¿Cómo se lo ganó?

Jack: Lo ganó en la guerra de los blancos para liberar a los negros.

Viejo Cabaña de Piel: Ah sí, los hombres blancos *negros*. He oído hablar de ellos. Dicen que un hombre *negro* una vez se convirtió en Hombre Verdadero.

Son criaturas muy extrañas. No tan feos como los blancos, eso sí. Pero igual de locos.

Su rostro era conocido en cine y televisión. Siempre en condiciones de dignidad, actuó como "indio real" en la serie *Caribou Country*, de la CBS a principios de los años 60, y luego fue Ol' Antoine en *Smith*, de los estudios Walt Disney. La hizo de esquimal más de una vez y llegó a salir en la serie *Bonanza*. Pero ¿quién fue este indígena mediático que siempre conservó credibilidad y representividad para sus pueblos?

Nació como "Trueno que llega a la tierra del agua", o Teswahno, en 1899, en la reservación Burrad Inet al norte de Vancouver, Canadá. Como el personaje de Dustin Hoffman, fue arrebatado de su tribu y educado en la "civilización". A los 19 años lo casaron por arreglo familiar con una muchacha squamish a quien no conocía. Vivieron juntos 52 años y tuvieron ocho hijos. Sobrevivieron seis.

Hacia 1947, luego de ser leñador, obrero y estibador en los puertos de Pacífico norte, sufrió un accidente grave, perdió el empleo y terminó como artista trashumante con sus

hijos y un primo suyo. Conformaban el grupo musical y dancístico Dan George y sus Animadores Indios. Se echaron a rodar por Norteamérica. Él tocaba el contrabajo (*fiddle bass*). Hasta entrados los años 50.

Con el tiempo, se convirtió en un importante jefe salish y vocero de las Primeras Naciones. En 1967 causó impacto nacional en Canadá al leer en el centenario de Vancouver su discurso "El lamento de la Confederación", una proclama fundamental en el renacimiento de los pueblos originarios del continente americano.

Poeta, actor, contador de historias, se dio tiempo alguna vez para irse de gira más de un año con el grupo de rock Fireweed. Al final de su vida la universidad de Fraser le concedió un doctorado honorífico en Leyes. Murió en 1981.

Testigo del siglo, hizo lo suyo. Hizo la lucha, siempre del lado de sus pueblos. No sólo dejó su rostro tardío en el celuloide. También su voz. Y su palabra escrita, sencilla pero significativa. Aquí se presentan dos textos de la antología *The Best of Dan George* (Hancock Press Publishers, Columbia Británica, 2004).

Nota y traducción:
Hermann Bellinghausen

UNA VEZ MÁS

Una vez más me deleito al oír el murmullo del agua de la tierra.
Una vez más disfruto sentir en la cabeza de un niño que toco el porvenir de mis huesos.
Una vez más veo el color de la felicidad diciéndome que la canción de mi muerte me va a gustar.

Entonces, ¡oh Tierra! estaré listo para devolvarte lo poco que me quede luego de tantos años de tomar de ti.

página
fornal



TUJANA, BAJA CALIFORNIA, 1995. FOTO: ALEX WEBB

LA TIERRA ME ESPERA

Las noches me ponen retrospectivo,
los días me dan qué hacer,
las mañanas me llenan de deseos,
los ayeres de sabiduría,
la luna de vanidad,
el cielo de nostalgia,
el sol me da miedo.
¿Y la Tierra?

Ella me espera nada más.